



*Ministerio Público de la Nación*  
*Fiscalía General N° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal*

Excma. Cámara:

Javier Augusto De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía N° 4, en los autos FPO 12006762/2003/CFC1 del registro de la Sala I, caratulados: “NN: N.N. s/ homicidio simple. Denunciante: Presidente Comisión Derechos Humanos, Diputada Cristina Barrios y otros”, me presento y digo:

**I.** Que conforme lo dispone el art. 466 del Código Procesal Penal, vengo a emitir opinión sobre el recurso de casación interpuesto por la querella contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas que confirmó el rechazo del pedido de citar a prestar declaración indagatoria a Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, formulado por la querella.

**II.** En autos se investiga la causa de la muerte del soldado Mauro Francisco Ramírez, ocurrida el 26/06/2003 entre las 9:30 y 10 horas en el destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino, ubicado en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones. El soldado se encontraba cumpliendo el servicio de guardia cuando perdió la vida a causa de un disparo con el arma reglamentaria, un fusil FAL calibre 7.65 mm.

La investigación de los hechos en un comienzo tramitó en la justicia provincial. Allí, luego de la realización de una serie de medidas probatorias, el juez local dispuso el archivo de las actuaciones por considerar que se había tratado de un suicidio (resolución del 26/09/2023).

Los hechos llegaron a conocimiento de la justicia federal a instancias de la madre del soldado fallecido, Mónica Susana Pinto, con la colaboración de María Cristina Barrios, presidenta de la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos dependiente de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.

Luego de una contienda positiva de competencia entre el juzgado federal de primera instancia de Posadas y el juzgado local, la CSJN resolvió que correspondía la intervención de la justicia federal.

En octubre de 2004 las actuaciones fueron remitidas al juzgado federal de Posadas, quien delegó la instrucción en los términos del art. 196 del

CPPN. El fiscal federal ordenó diversas medidas de prueba: declaraciones testimoniales, informes, reconstrucción del hecho, pericias, y una nueva necropsia.

A pesar de las nuevas pruebas incorporadas, el 29/4/2008, el fiscal interviniente solicitó el archivo de las actuaciones por considerar que la pesquisa estaba agotada.

El juez federal, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de las actuaciones, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas (resolución del 30/09/2008).

Luego de esta decisión, la parte querellante se presentó nuevamente y solicitó diversas medidas probatorias, de las cuales se corrió vista al MPF.

El 26/06/2015 la Procuración General de la Nación, a fin de robustecer y garantizar la actuación del Ministerio Público Fiscal, dispuso la designación de un segundo fiscal en estas actuaciones, para que ambos actúen de forma conjunta o alternada, y la intervención como colaboradora de la Procuraduría de Violencia Institucional (Resolución MP N° 1946/15).

El 28/03/2016 los representantes del MPF contestaron la vista conferida y solicitaron el desarchivo de las actuaciones. En su presentación, consideraron que el hecho materia de investigación había sido objeto de una instrucción deficiente y que la investigación adolecía de serias irregularidades cometidas en el inicio que, incluso, conllevaron a la formulación de una denuncia contra el juez local por posible prevaricato. Las deficiencias, a su vez, estuvieron relacionadas con la falta de toma de ciertos rastros en el momento inicial; con la preservación de pruebas y recepción de testimonios. A su vez, destacaron como irregular el hecho de que la prevención hubiera sido llevada a cabo por la misma fuerza, cuyos integrantes podrían estar implicados en los hechos. Por otro lado, resaltó el derecho de las posibles víctimas de un delito a la tutela judicial efectiva. Y, finalmente, solicitó medidas probatorias.

El 31/03/2016 el juez federal ordenó el desarchivo y desde ese entonces se han practicado diversas medidas de prueba.

**III. La presente vía recursiva:** la querella, con patrocinio letrado del defensor público, solicitó la convocatoria a prestar declaración indagatoria del soldado Eduardo Jeremías Brevel y el suboficial Ovidio Francisco Almeida, debido



Ministerio Público de la Nación  
Fiscalía General N° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal

a que considera que los nombrados habrían estado presentes en el momento del deceso del Soldado Voluntario Mauro José Francisco Ramírez.

Su hipótesis acusatoria fue formulada de la siguiente manera:

*“... el día 26 de junio de 2003 el suboficial Ovidio Francisco Almeida concurrió a las 9:30 horas al puesto n° 2 de la guarnición militar, juntamente con el soldado Mauro José Francisco Ramírez, para efectuar el relevo de guardia. El soldado saliente de la guardia anterior –iniciada a las 7:30 horas- era Eduardo Jeremías Brevel (V. decl. Almeida, fs. 995 vta.). El procedimiento habitual de cambio de guardia exige la comprobación de armamento, ordenada por el suboficial y practicada por el soldado saliente, quien constata –tras dos golpes de manivela- que el fusil se encuentra descargado (decl. Bogarin 8-6-16, entre muchos otros). Quien tiene el cargador colocado es el guardia saliente (en el caso, Brevel), a diferencia del entrante (Ramírez), que debe colocarlo (decl. Almeida, fs. 1540)”.*

*“... En el marco de ese procedimiento es que se produjo el disparo que impactó en Ramírez, siendo Brevel -soldado novel e inexperto, incorporado en el mismo año 2003- y Almeida los dos excluyentes actores, cada uno en el rol que reglamentariamente tenían asignado”. Citó una declaración del testigo Leguizamón que refiere: “se comentaba que se escapó un tiro, no que fue un suicidio (fs. 1487).*

Y continuó su hipótesis: *“Las constancias de la causa llevan a la convicción que Almeida y Brevel, conmocionados por lo ocurrido, y muy probablemente tras modificarse la escena (V. fs. 221/233; cambio del arma, y del cargador hallado en el bolsillo del fallecido), iniciaron presurosamente su regreso al puesto de guardia, previendo que debían mostrarse sorprendidos al ‘anoticiarse’ de lo ocurrido, e instalando la hipótesis de suicidio”.*

En síntesis, la querella sostiene que, en el marco del procedimiento de cambio de guardia, se habría producido el disparo que impactó en Ramírez, dejando entrever que el mismo fue a causa de la inexperiencia de Brevel -“soldado novel e inexperto, incorporado en el mismo año 2003”- y que Almeida habría encubierto el suceso.

Al momento de contestar la vista conferida, el auxiliar fiscal estimó que en caso de que el juez accediese a la solicitud impetrada (citar a declaración indagatoria a Brevel y Almeida) corresponderá desglosar de autos las declaraciones testimoniales prestadas por los nombrados a fin de no vulnerar el derecho de defensa (art. 18 CN).

El juez federal rechazó el pedido y el criterio fue confirmado por la cámara del fuero, por considerar que la decisión se hallaba fundada y que *“el llamado a prestar declaración indagatoria es una actividad técnicamente discrecional del Juez, que se encuentra concentrada por su condición de instructor de la causa, y es el único que puede calificar su recepción como pertinente y útil a los fines de la investigación (art. 199 C.P.P.N.)”*.

Contra aquella decisión, la querella interpuso el recurso de casación en estudio, que fue formalmente concedido por el *a quo*.

**IV.** De la reseña del trámite de esta investigación, considero que el caso constituye una excepción a la regla según la cual el rechazo del pedido de tomar declaración (testimonial, indagatoria, no jurada o como quiera llamársele) no es apelable.

Aquí se encuentra involucrada la posible responsabilidad internacional del Estado argentino, la cual incluye todas las conductas de impericia, encubrimiento, prevaricato, etc. posteriores al hecho que pudieron haber llevado a cabo las distintas autoridades.

Por ello, entiendo que la Cámara se encuentra habilitada para tratar el fondo de las peticiones.

Fiscalía N° 4, 7 de febrero de 2025.

Javier Augusto De Luca  
Fiscal General